

PULSO

REGIONAL

Año 10 | #89 | Julio 2026

POR LA MEMORIA Y JUSTICIA

RIESGOS ANTE UN
GOBIERNO AUTORITARIO



EDITORIAL

Sumario

- 3** *Criminalización en camino*
- 6** *Completando el camino a la dictadura fujimorista*
- 8** *"El fujimorismo será una regresión autoritaria"*
- 9** *Hablan las y los dirigentes*
- 10** *La memoria y nuestra cultura como trincheras frente al autoritarismo*
- 12** *Memoria y resistencia frente al retorno autoritario*
- 15** *Saberes ancestrales y autonomía*

El Sur y su apuesta por una real democracia

Hay que decirlo con claridad: el sur andino abraza hoy la defensa de la democracia con una madurez histórica ejemplar. No es una postura nacida del azar, sino del sentir profundo de nuestras comunidades frente a un escenario que abre justificados temores de retroceso autoritario e impunidad. La entrega de credenciales a Keiko Fujimori y su inminente juramentación este 28 de julio no ocurren sobre un territorio indiferente, sino en medio de una arquitectura de poder centralista que históricamente ha pretendido silenciar las voces y agendas de las mayorías campesinas, indígenas, obreros y estudiantes y otros sectores del país.

Frente a la incertidumbre y el miedo legítimo a la represión y la criminalización ante la exigencia de derechos y sus demandas históricas, el silencio no es una opción para los pueblos del sur. La respuesta que brota desde el Cusco, Apurímac y Puno no es el aislamiento, sino la reafirmación de su inquebrantable cultura de solidaridad y su vocación por la justicia social. El voto del sur es la expresión genuina de un pueblo que demanda respeto a su dignidad, que no busca confrontación sino un desarrollo real, y que exige que el nuevo gobierno actúe dentro de los cauces constitucionales y privilegiando el diálogo. Las comunidades quechuas, aymaras y amazónicas conocen muy bien el valor de la resiliencia porque la han forjado en la vida cotidiana en sus territorios. En momentos de dificultad, es su sabiduría ancestral y su tejido social comunitario la mejor respuesta contra el autoritarismo y el riesgo de los derechos humanos.

No estamos ante un sur que se calla; estamos ante poblaciones organizadas que ponen sus agendas de desarrollo, su cultura y su legítima aspiración a mejores condiciones de vida, recordándonos que el verdadero poder de una nación reside en la soberanía y los derechos de sus ciudadanos.

Desde Pulso Regional, nos reafirmamos con firmeza en la defensa de los derechos humanos, la memoria, la democracia real y la justicia, pilares fundamentales de una nación y sociedad más justa.

COMITÉ EDITORIAL:

Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH
Centro Bartolome de Las Casas - CBC
Centro para el Desarrollo de los
Pueblos Ayllu - CEDEP AYLLU
Derechos Humanos Sin Fronteras - DHSF

EDITOR PERIODÍSTICO:

Wilson Chilo L.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

Victor Ligarda Alarcón

ILUSTRACIÓN PORTADA:

Fotoportada: Gonzalo Ernesto Miranda

CORREO:

pulsoregionaldecusco@gmail.com

FACEBOOK:

Pulso Regional Cusco

Derechos en riesgo, prohibido callar

La secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Tania Pariona advierte un escenario de alta vulnerabilidad para defensores ambientales e indígenas. Frente a la captura institucional y el rebrote del 'terruqueo', llama a articular una resistencia democrática desde las bases.



Por Wilson Chilo L.

¿Qué escenario le espera a la democracia y a los derechos fundamentales en el Perú frente a la captura institucional y el avance de los discursos autoritarios?

En lo que respecta a los derechos humanos, hemos tenido un retroceso en derechos fundamentales como la igualdad de género, la educación sexual integral, el derecho a la verdad y justicia con las leyes de amnistía, la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y el paquete de leyes pro-crímen. A ello se suma la flexibilidad en materia de derecho ambiental a favor de concesiones mineras y petroleras. El escenario posible, con un potencial riesgo, es que esto se agrave más. Ya no estaríamos hablando solamente de un retroceso normativo, sino del agravamiento de estos derechos, porque ejercerlos costaría muchísimo más.

Si las contrarreformas normativas de los últimos años ya han consolidado una captura parcial del Estado, ¿cuál es el siguiente paso bajo una administración fujimorista?

El siguiente paso es el debilitamiento de las instituciones del Ejecutivo, cuyos ministerios tendrán que ajustarse a los nuevos marcos normativos. Hemos tenido una captura institucional y el vaciamiento en la funcionalidad de organismos autónomos. Existe la pretensión



Tania Pariona - Secretaria ejecutiva de la CNDDHH.

Entrevista

de reducir ministerios, retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bloquear el enfoque de género o ampliar la amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas por los casos del 2022 y 2023, además del intento de retornar al fuero militar. La situación es de un potencial riesgo de hechos que van a ir concretándose, donde los más perjudicados somos los ciudadanos, las comunidades y la gente pobre.

Keiko Fujimori ha señalado que los derechos del futuro se reducen a agua y saneamiento, sugiriendo que se debe dejar atrás el pasado. ¿Qué consecuencias trae esta visión para la memoria histórica de los pueblos?

Es totalmente equivocado. Un país que no mira su pasado y su memoria está condenado a repetirla. No mirar el pasado es negar que hubo víctimas de crímenes de lesa humanidad y mujeres esterilizadas que buscan justicia, que están esperando reparación y que se respete su dignidad. Es desconocer todo lo que ocurrió en el gobierno de su padre y que hizo tanto daño al país en la década de los noventa. La señora quiere pasar la página como si nada hubiera ocurrido. Ella se enfrenta a un alto porcentaje de gente que no se siente representada por ella, porque no representa la justicia, la dignidad ni el derecho a la verdad.

A pesar de reconocernos como un país intercultural, los discursos de odio y el racismo han ganado terreno en el debate público. ¿Cómo se debe confrontar esta problemática?

La denuncia a estas prácticas de racismo, discriminación y a este pensamiento colonial que ha recaído en vocerías de candidatos, simpatizantes y periodistas que reproducen el mismo mensaje es vital. Eso es realmente terrible en un país que dice ser de mucha cultura e identidad. Todo eso cae en saco roto cuando no se le reconoce la autoría política a la diversidad cultural y cuando se nos niega la posibilidad de tener una voz crítica. Creo que hay que volver a ratificarnos en nuestra lucha frontal contra el racismo, la discriminación y los partidos que menosprecian y vulneran la dignidad humana. Esa exclusión estará muy presente en este tiempo.

Foto: Entierro de Rosalino Florez, víctima de represión policial.

Ante la inminente consolidación de una política de criminalización y represión de la protesta, ¿de qué manera deben responder las organizaciones sociales y la sociedad civil?

La sociedad civil organizada está muy atenta y este tiempo significará una recomposición colectiva de redes y del movimiento de derechos humanos. Enfrentamos el riesgo de la captura del Estado por completo y el agravamiento de los derechos fundamentales, como la protesta, donde el uso abusivo de la fuerza o de armas letales ya lo hemos

vivido mediante represión militar y policial. Yo no descartaría que estas acciones sean parte de la política fujimorista; habrá mayor criminalización de la protesta social en sectores indígenas, campesinos y ambientales. Ya ocurre el 'terruqueo' y amenazas públicas en las redes sociales por simpatizantes del fujimorismo, llegando a un nivel de polarización preocupante.

Bajo este panorama de alta vulnerabilidad para dirigentes y líderes sociales, ¿cuáles deben ser las acciones prioritarias para los defensores de derechos humanos?



Entrevista

Nos toca enfrentar un escenario bastante riesgoso para quienes ejercemos el rol de defensores y defensoras. Una primera acción que nos tiene que autoconvocar es volver a organizarnos en nuestras bases, pueblos y comunidades para formar espacios de discusión sobre este contexto. Esto tiene sustento en algo que desde la Coordinadora hemos promovido con el Consenso Nacional por los Derechos Humanos como herramienta de incidencia política. Contiene siete ejes temáticos que cubren las demandas de sectores excluidos o en alta vulnerabilidad. Nuestro instrumento político en este tiempo es este consenso, además de hacer un llamado pú-

blico para constituir en el Parlamento un bloque multipartidario por la democracia.

¿Qué recomendaciones o pautas de acción extiende a la ciudadanía en general, a los jóvenes y a las mujeres en este proceso?

Recomendamos a los ciudadanos, juventudes y mujeres de sectores diversos a que podamos tener una actitud vigilante e involucrada en todo este proceso de lo que va a significar un mecanismo de resistencia y de defensa de aquello que para nosotros es irrenunciable. No podemos renunciar a los

derechos humanos. Los derechos humanos son pilares fundamentales de la democracia; o sea, no podemos hablar de democracia teórica o al vacío sin respetar los derechos humanos.

Finalmente, frente al temor y los ataques de deslegitimación, ¿cómo evitar que la población opte por replegarse en el silencio?

Nos toca afirmar nuestros derechos porque quieren conducirnos a la autocensura, y eso no debe pasar. No podemos creer que lo que estamos hablando no lo podemos hablar o hacerlo bajito. En otros países estos temas son naturales en la conversación; no puede ser que aquí sean censurados o estigmatizados. Hay más personas clamando por una democracia participativa y plural, que incluya la diversidad cultural, donde los ciudadanos se vean reflejados en la participación directa. No somos pocos en esto: habemos más personas, instituciones y colectivos, y eso genera valor cuando uno trabaja en redes y articulación.



“

Hemos tenido un retroceso en derechos fundamentales como la igualdad de género, la educación sexual integral, el derecho a la verdad y justicia con las leyes de amnistía, la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y el paquete de leyes pro crimen”

Completando el camino a la dictadura fujimorista

Los cuatro pilares de la arquitectura autoritaria: el pacto cívico-militar, la alianza económica, la constitución del “enemigo” y el retorno del Estado clientelar.



Soc. José Antonio Lapa Romero

La democracia es un vestigio arqueológico en el Perú. El poder político levita sobre un pueblo distante, bajo una coalición autoritaria y mafiosa desde el Congreso que tiene gran parte de la institucionalidad estatal bajo captura y donde el Ejecutivo tiene un rol decorativo. Los grupos de poder se han vuelto actores silenciosos, cómodos a legitimar autoritarismos y dictaduras mientras no se afecten sus intereses y privilegios.

Las decisiones se imponen desde un Congreso donde el pacto autoritario ha garantizado su permanencia a partir de un extendido reparto de las estructuras del Estado. Esto se sostiene en un manejo corrupto de las macroestructuras, la impunidad para las Fuerzas Armadas por las violaciones de derechos pasadas y actuales, el retroceso de derechos ciudadanos y la intensificación de los ataques contra los inventados “enemigos”.

El fujimorismo desde la coalición autoritaria viene constituyendo la arquitectura camino a la reconstitución de la dictadura. Si algo caracterizó al fujimorismo de la década de los noventa fue el control político de la institucionalidad estatal, la coalición cívico-militar, el extendido clientelismo y la violencia sistemática sobre sus “enemigos”.

Así, nos encontramos camino a completar la arquitectura de la dictadura fujimorista a partir de la reconstitución y constitución de cuatro características centrales, sin aún ser gobierno:

1. La reconstitución de la relación con las Fuerzas Armadas y policiales

En primer lugar, la reconstitución de la relación con las fuerzas armadas y policiales garantizando centralidad, privilegios (bonos, incrementos salariales y otros) e impunidad. Esto se realiza a través de eximirlos de responsabilidad penal en el uso de la fuerza. El corolario es pasar los delitos que cometieran del fuero civil al militar, lo que crea condiciones para reeditar el pacto cívico-militar explícito —en especial con sus élites para el apoyo subordinado— que garantice permanencia en el poder con mano dura, represión, seguimiento y hostigamiento contra los inventados “enemigos”. Estos suelen entrar todos bajo la categoría de “zurdos”, “rojos” o “terrucos”, desestructurando a aquellos de la misma institucionalidad estatal que se muestran incómodos al orden autoritario, como fue la DIVIAC.

2. La relación con los grupos de poder económico

En segundo lugar, la reconstitución de la relación con los dueños del Perú y los grupos de poder económico, quienes no solo legitimaron la dictadura de la década de los noventa, sino han sido uno de los principales financistas permanentes de la campaña de la “chica” —llamada de esta forma por Montesinos—. Su relación se ha reconstituido con uno de los sectores más importantes, como el

agroexportador, a partir de la aprobación de la ley Chlimper 2.0. Es indudable que estos sectores mantendrán y contarán con mayores privilegios desde el Estado, y tendrán garantizada mano dura frente a la situación de permanente conflictividad. La represión y violencia como práctica extendida contarán con impunidad, dada la nueva legalidad.

3. La reconstitución del “enemigo” y la psicología totalitaria

En tercer lugar, la reconstitución del “enemigo” característico de las dictaduras que, en la década de los noventa, pos captura del líder senderista, se pasó a constituir como sujetos a todos aquellos que se enfrentaban a la dictadura constituida nombrándolos, deslegitimándolos y siendo objeto de un ataque sistemático a quienes se les envolvía como terrorista o pro terrorista. Esto vuelve a reeditarse no solo a través del terruqueo extendido en tiempos de “democracia” de los últimos 25 años, sino en la constitución del “enemigo”.

Por un lado, vienen siendo objeto de ataques todos aquellos que desde la so-

ciedad civil, como las organizaciones de derechos humanos, sufren hostigamiento permanente y control político a través de la APCI porque son considerados incómodos al gobierno y sobre quienes se intensificará la violencia de Estado. Por otro lado, se ataca a los pocos espacios de institucionalidad estatal aún no capturada a quienes se les ha considerado enemigos, y quienes vienen recibiendo hostigamiento, disciplinamiento y “sanción” por no obedecer a las órdenes de la coalición autoritaria.

Al enemigo no solo hay que disciplinarlo y castigarlo a través de la aplicación de las normas que sostienen un estado de derecho precario vaciado de contenido e ineficaz, sino negándole su condición humana nombrándolos como “comunista”, “izquierdistas” o “terrucos”. Esto legitimaría, por lo tanto, la violencia, la represión, que se le meta bala y, si fuera necesario, desaparecerlo. Este imaginario y sentido común extendido en una parte importante de la población muestra la construcción de una psicología totalitaria que es lo más peligroso de los tiempos del fujimorismo, porque las fuerzas armadas que constituyen parte de la dic-

“

La reconstrucción de una psicología totalitaria es lo más peligroso de los tiempos del fujimorismo”

tadura contarían con un manto de legitimidad de un sector de la sociedad y la legalidad para hacerlo.

Entonces, la masa o pueblo totalitario que forma parte del fujimorismo, pero que va más allá del fujimorismo, constituye una mayoría acrítica e intolerante. Lo es no solo contra aquellos que nombran como “comunistas” o “izquierdas”, sino contra aquellos que son diferentes y votan diferente, como los campesinos, sureños o indígenas, contra quienes se ha vuelto tolerable la violencia, la represión o que les metan bala (herirlos o matarlos), como han mostrado los permanentes conflictos sociales y políticos.

4. El Estado clientelar

En cuarto lugar, el gobierno fujimorista, más allá del maquillaje de gabinetes amplios, constituye la reconstitución de un Estado clientelar que garantice el orden hacia arriba y mantener leales a los diversos sectores sociales o adherir a otros a la masa fujimorista, que indudablemente mantendrá una situación tensa en algunos territorios que no forman parte del pueblo fujimorista.

Lo cierto es que el camino a la dictadura fujimorista no solo implica la casi absoluta concentración del poder y la reconstitución de un gobierno cívico-militar con respaldo y legitimidad de los grupos de poder económico. Implica, sino, la constitución de un enemigo sobre quien se extenderá la violencia y hostilidad, y una masa fujimorista que legitimará y tolerará la violencia y, si fuera necesario, la desaparición.



Foto: Movilización en la ciudad del Cusco.

“El fujimorismo será una regresión autoritaria”

Ramón Pajuelo es antropólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En esta entrevista analiza la regresión autoritaria que amenaza al país y el desafío histórico que representan las identidades y los territorios del sur andino.

¿Qué riesgos proyecta para la democracia y los derechos humanos un gobierno de Keiko Fujimori?

Va a significar un gobierno de regresión autoritaria. Entramos en este siglo a una recuperación débil de la democracia, procedimental y electoral, que ni siquiera entregaba la legitimidad que las elecciones dan. Frente a esa crisis, Keiko Fujimori significa el regreso hacia atrás. Su figura representa una regresión autoritaria: reconcentrar todo desde el poder, reubicar el peso de la hegemonía neoliberal y relanzar al Perú con el rumbo que tenemos desde fines del siglo pasado. Esto va a significar Keiko Fujimori: arrasando instituciones, arrasando derechos y reprimiendo voces en alza contra su presencia en el poder. Es un riesgo muy fuerte para la posibilidad de una profundización democrática.

Considerando las recientes leyes de impunidad y la concentración de poder, ¿será el sur andino el principal eje de resistencia?

Es peor que una simple continuidad; es concentrar el sentido conservador, ultraneoliberal y ultraderechista en manos de una persona que ha logrado atraer rápidamente el apoyo de los grupos de poder empresarial tras su figura. Tendrá todo puesto para hacer y deshacer. Pero va a tener resistencia. Las elecciones muestran que buena parte del país, con un gran sentido territorial —el sur, pero en general las zonas con mayor pobreza y sentido popular— votó en contra de esa alternativa. Esta mezcla de una ascendencia territorial y sociocultural, como en el caso del sur andino, con una ascendencia popular, es lo que termina de armar una resistencia popular. Hoy, para el Estado peruano, está comenzando a incubarse

un tremendo desafío que tiene que ver con el territorio, las culturas y los pueblos en esos espacios.

Durante la campaña, los discursos de racismo hacia las comunidades indígenas fueron validados por políticos y medios. ¿Cómo se reconstruye un país bajo ese nivel de menosprecio?

Cambiando el país. Y eso es lo que no quieren. Vemos una reacción de los sectores de élite, de los dueños del poder, porque han visto en todas estas décadas que las bases de su poder están sacudidas. Cuando los sectores dominantes ven amenazado su poder, reaccionan de la peor forma. Hay un tremendo sentido común racista y discriminador que envuelve el temor a que los de abajo capturen el poder.

Pero esa es una captura inevitable en términos históricos. En el Perú hay un proceso de ascenso social desde abajo de enormes sectores populares, cholos e indígenas, que están transformando el país desde dentro. El gobierno de Keiko Fujimori tendrá que hacer frente a eso. En ese contexto se lee la resistencia del Sur, que después de las masacres de Dina Boluarte, va al fondo del asunto: cambiar el Estado, la democracia, la nación y la ciudadanía que tenemos desde inicios del siglo XIX. Es un sentido de sociedad que no quiere ser pisoteado por un Estado centralista vinculado al poder de las élites.

“

Hoy, para el Estado peruano, está comenzando a incubarse un tremendo desafío que tiene que ver con el territorio y las culturas”

Hablan las y los dirigentes

“La agricultura familiar en Cusco resiste al abandono estatal y al avance minero”

Rolando Salas, presidente de la FARTAC, advierte sobre el abandono del sector agrario frente al cambio climático y el avance de las concesiones mineras que amenazan la soberanía alimentaria de las comunidades. Entrevista realizada por el programa radial Uyarinakusunchis, Radio Inti Raymi, todos los jueves de 5 a 6 p.m. y a través de redes sociales del CBC.

¿Cómo percibe la situación actual del sector agrario en Cusco?

La historia del agro en Cusco es la de un total abandono estatal. Hasta la fecha, ningún gobernante se ha atrevido a implementar una verdadera política agraria en el Perú.

¿Cuáles son las prioridades urgentes para las comunidades campesinas?

Pedimos al nuevo gobierno que sea para todos y no nuestro verdugo, como han demostrado ser los anteriores al tratarnos como enemigos del “Perú profundo”. Exigimos mayor presupuesto para el desarrollo agropecuario. No queremos más promesas vacías sobre mecanización. Necesitamos seguridad hídrica urgente: siembra, cosecha y almacenamiento de agua para enfrentar las sequías y garantizar los alimentos. Además, exigimos el derecho al seguro agrario; el Ministerio de Agricultura nos lo niega bajo el argumento de que, por ser de la agricultura familiar, solo producimos “para nuestra barriga”. Es una exclusión inaceptable.

Existe preocupación por comunidades que cambian la agricultura por la minería. ¿Cuál es su postura?

En provincias como Paucartambo, Espinar y Chumbivilcas, casi todos los territorios están concesionados. Algunos compañeros prefieren irse a la mina porque dicen que el campo ya no es rentable sin apoyo. Dejan la agricultura orgánica por consumir productos industrializados. Pero la contaminación social y ambiental en las cabeceras de cuenca es inmensa y nos afecta a todos, no solo a los que están en la bocamina.

¿Qué expectativas tiene frente al nuevo gobierno de Keiko Fujimori?

Como democráticos, aceptamos los resultados electorales. Exhortamos a la señora Fujimori a que cumpla y demuestre que no liderará un gobierno autoritario. Queremos que construya una patria donde las opiniones de las comunidades nativas, quechuas y aymaras sean escuchadas. En el Perú no se trata de izquierda o derecha; ambas nos han demostrado ser irresponsables. Necesitamos gobernantes que amen al país y nos devuelvan la confianza y la justicia.

“El desarrollo no puede limitarse a indicadores económicos”

Ante un escenario político adverso para los derechos humanos, Eydriam Valdivieso (AREJO Apurímac) plantea una ruta de vigilancia social, cierre de brechas históricas y protección a los defensores del territorio.

¿Cuáles deben ser las prioridades de la sociedad civil apurimeña para defender los derechos frente al próximo gobierno?

Frente al contexto actual, la sociedad civil tiene tres tareas fundamentales. La primera es ejercer una vigilancia permanente sobre la actuación del Estado, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. La segunda es fortalecer la organización y la articulación entre comunidades, organizaciones sociales, mujeres, jóvenes y otros actores del territorio para construir propuestas y defender colectivamente nuestros derechos.

La tercera es promover una ciudadanía informada y participativa, capaz de enfrentar la desinformación, la violencia y la discriminación, impulsando el diálogo democrático desde las bases. En regiones como Apurímac, marcadas por profundas brechas sociales y conflictos, estas tareas son indispensables para que la defensa de los derechos dependa de una ciudadanía organizada y no de la voluntad del gobierno de turno.

¿Qué demandas prioritarias le exigirá la AREJO al nuevo gobierno central?

Exigiremos dos compromisos fundamentales. El primero es cerrar las brechas históricas que afectan a Apurímac mediante una presencia efectiva del Estado con servicios públicos de calidad en salud, educación, justicia e infraestructura. El desarrollo debe reflejarse en mejores condiciones de vida para la población y no limitarse a indicadores económicos. El segundo es garantizar el respeto a los derechos humanos y fortalecer la institucionalidad democrática.

Esto implica investigar y sancionar las vulneraciones de derechos, proteger a los defensores ambientales, prevenir la violencia contra las mujeres y toda forma de discriminación. Asimismo, exigimos que los conflictos sociales sean atendidos mediante el diálogo, la transparencia y la participación ciudadana. Un Estado que escucha y rinde cuentas fortalece la democracia.

La memoria y nuestra cultura como trincheras frente al autoritarismo

Es una conversación con Karina Bueno, activista de APRODEH, sobre el miedo, la resiliencia en el sur andino y los nuevos lenguajes de resistencia ante un panorama político adverso.

Cuando imagina un gobierno de Keiko Fujimori, más allá del análisis político, ¿qué miedos o certezas personales le genera ese escenario?

Creo que lo primero es el sentimiento de fractura de una tradición forjada por el sur y los pueblos originarios: evitar que Keiko llegara al poder era un acto de dignidad y justicia que iba más allá de lo electoral. En estas elecciones se rompió esa forma de justicia y transita por el cuerpo una desesperanza que se convierte en miedo. Ya sabemos de lo que es capaz el fujimorismo para prevalecer; no nos lo han contado, ahí quedan los rastros de esa historia. Es difícil ignorarlo.

Así se asoma el miedo. Para nosotras, como activistas y militantes de derechos humanos, es un temor razonable de ver amenazada nuestra existencia organizativa, nuestra libertad y nuestra vida misma. Hasta cierto punto, es paralizante.

Pero luego ese miedo se enfrenta con la memoria de lo que han sido capaces de hacer el movimiento social, los pueblos andinos y las mujeres para resistir y sobrevivir a estos poderes políticos y económicos de muerte, persecución y criminalización. Toda la resiliencia que nos han demostrado está a la par. Tan fuerte es el miedo como fuerte es la resistencia, y se asoman las ganas de reorganizarse porque no queda otra alternativa. No nos vamos a dejar matar; vamos a enfrentar la dictadura y la maquinaria de poder aplastante que se viene.

Defender los derechos humanos en el Perú ya es una tarea compleja. ¿Qué implicaría ejercer su labor bajo un régimen autoritario y qué es lo que más le dolería ver retroceder en las luchas que ha acompañado?

Somos conscientes de que el autoritaris-



Foto: Gonzalo Ernesto Miranda Terreros.

mo ha ido ganando espacio político e ideológico a través de leyes de impunidad y normativas pro crimen. En este escenario, sabemos que seremos un punto principal de ataque y de amenaza directa a nuestro trabajo, nuestras instituciones y nuestras vidas. Nos toca afianzar estrategias de protección, cuidado y un trabajo mucho más riguroso en lo administrativo y económico, porque debemos responder a las normativas vigentes de la APCI.

Sin embargo, es fundamental recordar que las instituciones de derechos humanos surgieron justamente para enfrentar este tipo de regímenes en escenarios sumamente complejos, como la insurgencia y el terrorismo de Estado. Incluso con miedo, se siguió luchando y acompañando a las víctimas para visibilizar voces, agendas y territorios. Ese tiene que ser nuestro principal frente de resistencia y memoria.

¿Qué es lo que más me dolería? Que las mujeres, las comunidades campesinas y las organizaciones se dejen ganar por el miedo. El miedo es comprensible, razonable e inmovilizador; genera un cansancio profundo porque se intenta transformar un sistema que es un monstruo y las fuerzas terminan agotándose. Sentiría mucha desesperanza y dolor si las orga-

nizaciones aliadas decidieran no hacer nada.

Usted conoce de cerca la fuerza organizativa de Apurímac. Pensando en las comunidades, las mujeres y la dirigencia con la que camina en el día a día, ¿cómo vislumbra el futuro y las formas de resistencia en la región?

Somos del sur andino: pueblos quechuas, comunidades campesinas, agricultores y agricultoras con identidad, que han resistido muchísimos episodios de violencia brutal en nuestros territorios y cuerpos. Esas violencias han intentado desaparecerlos y despojarnos de lo que somos, de nuestra cultura y de nuestras tierras, pero durante quinientos años no lo han logrado. Habrá cierto retroceso, desesperanza y cansancio por el miedo, pero, como lo hacen siempre nuestros pueblos, van a renacer, se van a reinventar y seguirán existiendo de mil maneras.

Quizá el derecho a la protesta sea duramente aplastado de forma sanguinaria, pero habrá otras formas de seguir existiendo: en nuestros cantos en quechua, nuestras comidas típicas, nuestro arte, nuestros carnavales, nuestros poemas, literaturas y nuevos lenguajes de lucha para seguir reflexionando.

Un campo de resistencia muy firme y poderoso será nuestra espiritualidad al lado de la Pachamama, de nuestros ancestros, nuestros muertos y de la memoria. Este escenario, así como será de duro para golpearlos y arrasarnos, también impulsará una fuerza muy genuina para aferrarnos a nuestras raíces y a nuestra memoria de lucha, de resistencia cultural y política.

“

Tan fuerte es el miedo como fuerte es la resistencia, y se asoman las ganas de reorganizarse porque no queda otra alternativa. No nos vamos a dejar matar”

“

Las instituciones de derechos humanos surgieron justamente para enfrentar este tipo de regímenes en escenarios complejos... Incluso con miedo, se siguió luchando y acompañando a las víctimas”



Foto: Karina Bueno.

Memoria y resistencia frente al retorno autoritario

Desde la defensa histórica de sus territorios, las comunidades del sur andino se consolidan como la reserva moral del país ante el avance de la impunidad.



Por: José Bayardo Chata Pacoricona,
Derechos Humanos y Medio Ambiente
(DHUMA)

La segunda vuelta electoral volvió a demostrar una verdad histórica que el poder central intenta deslegitimar desde hace décadas: Puno no es un territorio sometido ni resignado, sino una región con memoria, dignidad y conciencia política. El contundente respaldo electoral de la ciudadanía puneña no fue una decisión partidaria o coyuntural; fue una definición política y ética frente a dos proyectos de país. Por un lado, la continuidad de un sistema caracterizado por la corrupción, la captura institucional y la subordinación del Estado a intereses particulares; por otro, la posibilidad —subrayo esto, la posibilidad— de mantener viva la esperanza de cambio, transformación, defensa de los sectores históricamente excluidos y la refundación del Perú.

La posición puneña reivindica la me-

“

Puno ha demostrado que su voto responde a una convicción histórica profundamente arraigada: la defensa de la dignidad frente a cualquier forma de dominación, corrupción o autoritarismo”

Foto: Conmemoración de 9 de enero en Juliaca.

moria nacional y las luchas populares. Frente a los intentos de imponer el olvido, la impunidad, la normalización de la violencia y la desaparición de la ética en la administración pública, la ciudadanía respondió con un mensaje claro: el país no puede ser gobernado por quienes han deteriorado la democracia y consolidado redes de poder en beneficio de grupos privilegiados. En los últimos años, hemos visto cómo el fujimorismo y sus aliados han ejercido una influencia directa sobre el Congreso y diversas instancias del Estado, haciendo desmanes a sus anchas, retrotrayendo reformas democráticas y promoviendo una lógica de impunidad que elimina toda confianza ciudadana. El voto puneño expresó la indignación acumulada

La historia política de Puno sustenta nuestra postura. Desde las luchas campesinas por la tierra, el territorio, el agua y los derechos colectivos, hasta las movilizaciones recientes en defensa de la democracia, la región ha sido una de las principales reservas morales del país. Y lo manifestamos con orgullo. Cuando otros guardaron un silencio indiferente, las comunidades campesinas, los pueblos

originarios, las organizaciones sociales y la ciudadanía movilizada alzaron la voz frente al continuismo de una injusticia que nos ensombrece. Cuando el poder intentó imponer sus decisiones desde Lima, Puno respondió con organización y resistencia.

No es casual este rechazo a los sectores que representan el modelo de exclusión y concentración del poder. El voto puneño expresó la indignación acumulada de generaciones marginadas, pero también la voluntad de construir un país más democrático, justo y respetuoso de la diversidad cultural.

Las amenazas al Estado de derecho

Los tiempos que se aproximan generan profunda preocupación. La virtual consolidación de un segundo fujimorato, encabezado por Keiko Fujimori, representa la posibilidad de una ofensiva política, económica e institucional sin precedentes contra los derechos conquistados por décadas de lucha social. La experiencia de los años noventa nos dice que este proyecto buscará perpetuarse, obteniendo el control absoluto de las instituciones y la neutralización de la fiscalización democrática, tal como lo padecemos bajo la



Foto: Conmemoración de 9 de enero en Juliaca.



Foto: Wilson Chilo.

“

preocupa la intensificación de la persecución política y la criminalización de la protesta social”

dictadura de Alberto Fujimori.

Con la victoria de la señora K, es inminente la captura de organismos públicos llamados a garantizar la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la vigencia del Estado de derecho. La subordinación institucional a intereses políticos o económicos es una afectación actual y real contra la democracia. Cuando desaparecen los contrapesos, se abre el camino para la arbitrariedad, la impunidad y el abuso de poder.

En esa misma dirección, preocupa la intensificación de la persecución política y la criminalización de la protesta social. Las organizaciones populares, defensores de derechos humanos y dirigentes comunales enfrentarán mayores niveles de hostigamiento por cuestionar las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo. En un país profundamente desigual, restringir las libertades democráticas constituye una amenaza grave para los pueblos.

Justicia social y derechos humanos

Especial preocupación merece el futuro de los derechos humanos. Las heridas abiertas por las graves violaciones ocurridas durante las protestas sociales recientes continúan exigiendo verdad, justicia y reparación. Las decenas de víctimas mortales en el sur andino forman parte de una memoria colectiva que no borrarán los discursos oficiales. Mien-

tras existan responsables sin sanción, la democracia continuará en deuda con su pueblo. Preocupa el avance de las investigaciones por las masacres del 2022-2023, los casos emblemáticos de la violencia política de 1980-2000, el desmantelamiento del Lugar de la Memoria y de El Ojo que Lloro, las reparaciones por esterilizaciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas; agendas políticas que dependen directamente del Ejecutivo.

De igual manera, se vislumbra una profundización de políticas favorables a los sectores económicos tradicionales en detrimento de los derechos laborales, ambientales y territoriales. Las comunidades campesinas enfrentarán nuevas presiones sobre sus territorios mediante la expansión extractiva sin consulta previa. Los trabajadores podrían ver debilitadas sus condiciones de protección en nombre de una supuesta competitividad que solo beneficia a unos pocos.

Frente a este escenario, la respuesta del sur andino no será la resignación. La historia de Puno demuestra que, sobre la base de la dignidad organizada, la población es capaz de enfrentar los abusos del poder y construir alternativas desde abajo. La defensa de los derechos humanos, la justicia independiente y los derechos colectivos constituye una tarea permanente que no puede delegarse.

Puno ha demostrado que su voto responde a una convicción histórica profundamente arraigada: la defensa de la dignidad frente a cualquier forma de dominación, corrupción o autoritarismo. En un contexto de incertidumbre, la región reafirma su condición de territorio de resistencia, memoria y esperanza. Porque mientras existan comunidades organizadas y ciudadanos conscientes, ningún proyecto de concentración del poder podrá imponerse sin encontrar la firme oposición de quienes creen en el Perú de sus héroes y mártires.



Foto: Juliaca en conmemoración del 9 de enero.



Conocimientos ancestrales y autonomía

La fuerza de las productoras agroecológicas de Paruro



En la provincia de Paruro, las productoras locales organizadas demuestran que la agroecología es una forma de vida que asegura la salud de la comunidad y abre camino a la independencia de las mujeres rurales.

En el mercado agroecológico Allin Kawsay de Huanquite, provincia de Paruro, en la región del Cusco, las productoras locales muestran con orgullo el fruto de su trabajo: hortalizas frescas, granos

andinos y alimentos cultivados sin químicos, directamente de sus chacras a la mesa. Este espacio no solo fortalece la economía familiar, sino que abre camino a una mayor autonomía para las mujeres del distrito, quienes, organizadas, impulsan una producción responsable con la tierra y la salud. La agroecología, más que una práctica, se convierte aquí en una forma de vida que protege los saberes ancestrales y asegura alimentos sanos para toda la comunidad.



Foto: Cedeep Ayllu.



La educación pública debe ser gratuita y de calidad

Fotos: Gonzalo Ernesto Miranda Terreros.

